

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 171

FECHA: 10 de Junio de 2013

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
AMÉRICA LATINA	LAS PERLAS DEL TRANSPACÍFICO	2
BOLIVIA	UN NUEVO OPERATIVO ENCUBIERTO BUSCA INVOLUCRAR A UNA AUTORIDAD BOLIVIANA EN ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO Y AFECTAR LA IMAGEN DEL PRESIDENTE. CIA Y DEA LLEVAN ADELANTE UNA NUEVA CONSPIRACIÓN CONTRA BOLIVIA	3
	EL AISLAMIENTO DE LA COB	6
COLOMBIA	CELDA COLOMBIA	7
	IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL INGRESO DE COLOMBIA A LA OTAN	8
EL SALVADOR	BRECHA ENTRE PROPÓSITOS Y REALIZACIONES	9
HONDURAS	NUEVA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL	11
MÉXICO	SIN FUNDAMENTO, SENTENCIAN A 20 AÑOS DE PRISIÓN A TZOTZIL DE LA VOZ DEL AMATE	12
NICARAGUA	ORTEGA ASEGURA QUE PRONTO SERÁ REALIDAD EL SUEÑO DEL GRAN CANAL	13
PANAMÁ	PARTIDOS LE DAN LA BIENVENIDA AL FAD	15
PUERTO RICO	PUERTORRIQUEÑOS PIDEN LA EXCARCELACIÓN DEL INDEPENDENTISTA ÓSCAR LÓPEZ RIVERA	16

AMÉRICA LATINA

LAS PERLAS DEL TRANSPACÍFICO

En estos momentos se está negociando el acuerdo multilateral más amplio y uno de los más oscuros de la historia de la humanidad. Representantes de Estados Unidos, Chile, México, Canadá, Singapur, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Perú, junto con empresarios de todo el mundo, se han dado cita estos días en la ciudad de Lima para celebrar la 17ª ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Después de casi tres años de reuniones a puertas cerradas, nos vamos acercando al fin de un tratado que podría ser la cereza del helado neoliberal y represivo que el presidente Humala ha aceptado embutirnos. Si —como se calcula— llegamos a los últimos meses del año firmando este tratado, tendríamos que empezar a sufrir una mayor pérdida de soberanía nacional, un debilitamiento de la libertad de expresión, un ataque directo a la cultura y la expresión artística, y un encarecimiento de los precios de los medicamentos —a través de ampliaciones de patentes— en detrimento de la salud de todas y todos.

El signo más claro de que el TPP no beneficiará a las millones de personas que se verán afectadas por él, es que su contenido jamás se ha comunicado oficialmente ni a la población, y ni siquiera a los parlamentarios de los 11 países que lo discuten. De hecho, únicamente conocemos parte de él porque en los últimos años han sido filtrados ciertos capítulos del texto. El acuerdo prohibiría subsidios a agricultores y al sector cultural, abriría camino para afianzar la desregulación financiera, afectaría a la libertad de expresión y al uso del arte y la tecnología, ejerciendo una fuerte restricción en los derechos de propiedad intelectual.

Aparentemente, el TPP es un acuerdo de “libre comercio”, si bien contempla propuestas que incrementarían la intervención estatal en el mercado, restringiendo la competencia y elevando los precios. En 1995, la industria farmacéutica se aseguró de que la Organización Mundial del Comercio nos obligara a acatar una durísima ley de patentes de 20 años. Lamentablemente, estas corporaciones no quedaron satisfechas; por ello, con el TPP multiplicarían sus ganancias otorgándoles las prerrogativas para ampliar sus patentes de las maneras más diversas, pasando por encima de la vida y los derechos de millones de personas.

Otra de las perlas del Transpacífico son las limitaciones a las regulaciones por parte de los Estados y, por consiguiente, las extensiones a los derechos corporativos. Las empresas, más que nunca, tendrían el apoyo de este tratado para demandar directamente a los Estados —saltándose los sistemas judiciales nacionales— acudiendo directamente a cortes internacionales, tales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Podrían incrementarse situaciones tan terriblemente rocambolescas (amparadas por nuestro TLC con EE.UU), como la demanda que hizo Doe Run al Estado peruano (por \$800 millones) sobre el argumento de que nuestro Gobierno ejercía un trato injusto al exigirle el cumplimiento de las normativas medioambientales en La Oroya.

Haciendo un simple cálculo, podemos encontrar que, en 2012, la suma del PIB de Chile, México, Canadá, Singapur, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam y Perú representó únicamente el 37% del PIB de Estados Unidos. Esto nos da una apabullante idea de las relaciones de poder que se tejen dentro de las negociaciones, y de quiénes serán los beneficiarios del TPP. Así, expertos consideran a este tratado como una nueva estrategia de neocolonización por parte de EE.UU., y de los 600 representantes de corporaciones que tienen el privilegio de acceder al documento.

En conjunto, las personas que se verán perjudicadas por el TPP superan los 650 millones. Este número también representa a aquellos que sabemos casi nada del acuerdo. Me pregunto cómo es que podemos denominarnos países democráticos teniendo tratados de esta calaña, los cuales son escondidos celosamente por unos cuantos representantes del ejecutivo de 11 Estados junto a unas

seis centenas de empresarios. La organización antiimperialista y sin fines de lucro Just Foreign Policy se pregunta algo similar, y por ello ha recolectado un recompensa de \$40 mil para WikiLeaks, en caso filtrase el documento del TPP.

Fuente: [Francesca Emanuele. diario16.pe](http://diario16.pe)

BOLIVIA

UN NUEVO OPERATIVO ENCUBIERTO BUSCA INVOLUCRAR A UNA AUTORIDAD BOLIVIANA EN ACTIVIDADES DE NARCOTRÁFICO Y AFECTAR LA IMAGEN DEL PRESIDENTE. CIA Y DEA LLEVAN ADELANTE UNA NUEVA CONSPIRACIÓN CONTRA BOLIVIA

Dos agentes de la CIA identificados y con residencia en Santa Cruz y dos agentes de la DEA, que hace poco participaron de un curso antidrogas organizado por la FELCN y la embajada de EEUU, forman parte de un nuevo operativo encubierto que busca involucrar a una autoridad boliviana en actividades de narcotráfico y afectar la imagen del presidente Evo Morales.

A menos de un mes de que el presidente Evo Morales anunciara la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por injerencia en asuntos internos, una operación encubierta de inteligencia se viene desarrollando por los servicios estadounidenses para involucrar a algunas autoridades bolivianas, particularmente al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en actividades de narcotráfico.

Todavía es muy difícil de precisar sobre el tiempo desde que se está desarrollando la operación encubierta y combinada de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos: la Central de Inteligencia Americana (CIA) o la Drug Enforcement Administration (DEA) ¿Antes o después de la expulsión de USAID?, ¿es una reacción ante la medida adoptada el 1 de mayo de 2013 o forma parte de los intentos de construir una matriz de opinión nacional e internacional que levante sospechas contra el grado de compromiso real del gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico?

Hay razones que pueden apuntalar cada una de estas interrogantes. En oportunidades anteriores hemos denunciado los constantes intentos de Washington en tratar de presentar a Bolivia como un estado fallido en el enfrentamiento al narcotráfico. Todos recordamos como hace dos años atrás la embajada norteamericana en Bolivia coordinó un operativo conjunto de la CIA y la DEA para convertir al ex general de Policía, René Sanabria, de colaborador de la DEA en narcotraficante.

Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, se produjo una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz entre Reginald Tillery - un ex agente DEA que se quedó en Bolivia para trabajar con la NAS luego de la expulsión de la agencia antidrogas estadounidense en 2008-, con Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.

En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.

El objetivo de ese operativo, en febrero de 2011, estaba claro: montar una campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de una supuesta corrupción y vínculos con el narcotráfico en sus más altas esferas.

De nuevo a la carga

A dos años de ese operativo, todo parece indicar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, especialmente la DEA y la CIA en Bolivia, preparan en contubernio con algunas fracciones de la oposición de derecha, una nueva campaña de descrédito e intentos de desestabilización contra el gobierno popular de Evo Morales, recurriendo a las mismas mentiras de supuestos vínculos de altas personalidades del Ejecutivo con el narcotráfico.

Ahora el blanco aparente de los ataques es el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, contra quien los servicios de inteligencia norteamericanos están fabricando un expediente con supuestas evidencias que tratan de relacionarlo con actividades de narcotráfico.

Según fuentes bien informadas, los planes de la embajada norteamericana en La Paz pretenden utilizar a ex miembros y a algunos oficiales activos de la Policía como supuestos testigos y denunciadores contra el viceministro Cáceres, un ex dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare, ex alcalde de Villa Tunari y amigo personal del presidente Evo Morales.

El desarrollo del operativo cuenta con la participación de dos oscuros personajes que bajo la fachada de hombres de negocios radicados en la ciudad de Santa Cruz, vienen realizando su labor encubierta como agentes de la CIA y la DEA desde hace varios años.

Se trata de los norteamericanos David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. El primero un viejo agente de la CIA y la DEA, quien por orientación de estas agencias se radicó en Bolivia hace varios años, luego de contraer matrimonio con una joven boliviana y obtener ciudadanía de este país.

Wayne fue infiltrado por la CIA en los servicios policiales bolivianos como profesor de artes marciales, posición que le permitió desarrollar su actividad de espionaje y captación de posibles candidatos dentro de las fuerzas de seguridad bolivianas y su utilización como fuente de información para la embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo a la información obtenida, el ciudadano norteamericano también participó de alguna manera en la campaña de desestabilización que la ultraderecha boliviana, apoyada por las corrientes internacionales, llevó delante de forma muy activa contra el proceso popular que encabeza el presidente Evo Morales durante el periodo 2006-2009.

Las agencias de inteligencia estadounidenses, aprovechando esos vínculos estrechos le asignaron a Wayne la tarea de contratar posibles denunciadores contra el viceministro Cáceres, los que se encargarían de presentar y sustentar supuestas evidencias de los vínculos de la autoridad boliviana con actividades de tráfico de drogas, según se plantea.

La CIA, a través de Wayne, ha llegado a ofrecer hasta un millón de dólares a estos falsos testigos como pago a su colaboración, según se desprende de la información obtenida.

Wayne reporta directamente a Bert Davi Castorino, persona de origen italiano, nacionalizado en Estados Unidos y con un largo historial de servicio dentro de la CIA.

Al igual que Wayne, el italo-norteamericano Castorino lleva varios años radicado en Bolivia y es un importante enlace entre la estación CIA en La Paz con los grupos y líderes de organizaciones de extrema derecha de la ciudad de Santa Cruz. También mantuvo relaciones con los dirigentes de la línea dura opositora contra el proceso de cambio.

Aún no se tiene plenamente identificada a la estructura de esa nueva conspiración contra el gobierno de Evo Morales, pero todo indica que Castorino está a cargo y responde ante sus jefes de la CIA por la operación fabricada contra el viceministro Cáceres.

Como parte importante de estas acciones de la CIA, en colaboración con la DEA, Castorino está explorando qué personajes comprometidos con la justicia boliviana, ya sea jueces o fiscales, podrían servir al cumplimiento del operativo encubierto. Según señalan las informaciones preliminares, hace muy poco Castorino sostuvo un encuentro con el Fiscal cruceño Alvaro de la Torre, conocido por sus vínculos con los sectores más reaccionarios de la oposición y sobre quien existen sospechas de corrupción.

La reunión entre Castorino y Alvaro de la Torre se llevó a cabo en el Bar Discoteca Budu, al cual el enlace CIA acude con frecuencia y utiliza como lugar predilecto para tratar negocios que califica como delicados.

El representante de la CIA dispone de medio millón de dólares para el fiscal que investigue el caso, cuando la denuncia se haga efectiva contra Cáceres, y para que reciba la declaración de los falsos testigos y para que se encargue de promover una investigación sobre estos supuestos cargos.

Como parte del operativo encubierto, a partir del 13 de mayo dos agentes de la DEA se encuentran en Bolivia con el objetivo de encontrar y aportar más elementos al objetivo conspirativo.

La oportunidad para que los agentes DEA lleguen a Bolivia fue la organización de un curso anti-drogas para los miembros del GIOE de la FELCN que se llevó a cabo en el Hotel Asturias de Santa Cruz.

La coordinación del curso, que tuvo que llevarse a cabo hasta el 24 de mayo, pero que por razones no conocidas se suspendió el viernes 17, fue entre la FELCN, la NAS, la DEA y Donald Frerich, director de capacitación de la embajada de Estados Unidos en La Paz.

¿Pero es Cáceres el objetivo último de la operación encubierta?

Los servicios secretos de los Estados Unidos, como ha ocurrido con el caso del general Sanabria, están trabajando para que el operativo esté acompañado por una repercusión mediática dentro y fuera de Bolivia. Ya sea con relación directa o no, la CIA y la DEA espera que se produzca una reacción inmediata de líderes y políticos de oposición en sentido de pedir la renuncia del viceministro de Defensa Social y una investigación sobre hasta dónde conocía el presidente Evo Morales las supuestas actividades de tráfico de drogas de uno de sus más cercanos funcionarios.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos saben que el desarrollo de esta operación encubierta no producirá ningún terremoto que ponga en peligro la estabilidad del gobierno de Morales, dado el respaldo mayoritario que tiene de la población, según ha quedado demostrado en todos los sondeos de opinión desde que asumió la dirección del Estado boliviano.

Pero, por lo visto se pretende lograr dos objetivos: primero, alimentar una matriz de opinión internacional que criminalice y estigmatice aún más al gobierno boliviano en la lucha contra el narcotráfico. A las autoridades estadounidenses les ha caído bastante mal que Bolivia haya conseguido exitosamente la defensa de la hoja de coca al denunciar la Convención de Viena de 1961 y luego su reincorporación.

El gobierno de Morales también ha criticado duramente a la administración de Obama por incorporar a Bolivia con juicios negativos en su informe anual sobre la lucha contra las drogas, a pesar que las Naciones Unidas han reconocido que es el país que más ha reducido sus cultivos de coca respecto de Colombia y Perú, y que también el que más acciones de represión al accionar del narcotráfico ha llevado a cabo.

El segundo objetivo es construir una matriz de opinión dentro de Bolivia para afectar la imagen del gobierno boliviano y sobre todo del presidente Evo Morales, quien se dispone a participar de las elecciones de 2014 luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional habilite su postulación al responder positivamente a una consulta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Es evidente, entonces, que una vez más los sectores más reaccionarios dentro de EEUU y los órganos de inteligencia de dicho país muestran la falsedad sobre su disposición de establecer una real y efectiva colaboración con el gobierno boliviano para enfrentar el flagelo que constituye el narcotráfico, bajo principios de respeto a la soberanía y no injerencia en asuntos internos.

Como se ha señalado en oportunidades anteriores, la lucha contra el narcotráfico es el pretexto que Estados Unidos utiliza para tratar de imponer su presencia militar y el amplio despliegue de su enorme aparato que compone la llamada comunidad de inteligencia estadounidense, dirigido a la desestabilización y derrocamiento de los gobiernos progresistas en nuestra región que no se someten a los designios imperiales de Washigton.

Fuente: [Jaime Salvatierra](#). La Epoca / Rebelión

EL AISLAMIENTO DE LA COB

Tuvieron que pasar más de dos semanas de movilizaciones, bloqueos e interrupciones en los servicios públicos de salud y educación, para que finalmente la dirigencia minera que depende del Estado y que dirige la COB, reconozca que hicieron planteamientos exagerados. Pero no sólo se les ha ido la mano con lo que pidieron sino que el planteamiento de la jubilación con 100% del promedio de las últimas 24 papeletas de pago, mostró sin lugar a equívocos, que la solidaridad para la COB, de aquí en más, es de quienes perciben menos hacia quienes “ganan bien”, porque esos recursos adicionales para completar esas rentas provendrían del Fondo Solidario. Pero como los recursos del referido Fondo no serían suficientes, el Estado más allá de su actual aporte que supera los \$us1.400.- millones, debiera utilizar recursos que solo podrían salir de no ejecutar inversiones que crean infraestructura productiva, afectando a quienes no aspiran a jubilación alguna. Por esto, no extraña la convicción en el respaldo al gobierno, de campesinos que en el occidente debieron suspender sus inaplazables tareas en su única cosecha anual y también de quienes trabajan por cuenta propia en la ciudades, tampoco extraña que ahora estos sectores no proletarios se orienten a terminar con la estructura de clase y el rol en la conducción de la COB que se reserva al proletariado minero.

A la COB, lo que menos le importó fue la sostenibilidad del sistema previsional. Siguiendo la lógica de destruir al gobierno burgués que decepciona para después de la revolución proletaria construir todo partiendo de cero, en un nuevo estado socialista, al cual recién entonces se le permitiría ser prudente y racional, y frente al cual todos tendríamos que resignarnos por la sencilla razón de que ese finalmente sería nuestro gobierno, se orientó a concretar planteamientos tendientes a generar gasto fiscal exorbitante e insostenible, en vez de dirigir su mirada a los proletarios que menos ganan y en especial, al campesinado que no aspira a jubilación contributiva alguna, pero que sí necesita urgentemente inversión en infraestructura productiva.

La COB no consideró que el Estado ahora gasta en pensiones casi 5 veces más que en el neoliberalismo del 2005, no quiere reconocer que no existe un solo caso en que algún jubilado haya muerto en la indigencia. En el año 2003 la carga fiscal total por pensiones le imponía al Estado algo más de \$us 300 millones, los que fueron suficientes para que el déficit se calcule con o sin pensiones, era frecuente que los presidentes y ministros enrostrasen a los jubilados el ser los causantes de un déficit agravado en varios puntos. Los recientes pasados 12 meses, entre abril de 2012 y marzo de 2013, de acuerdo a información pública, el TGN ha gastado sólo en pagos al sistema de reparto y a la compensación de cotizaciones algo más de \$us 670 millones. En 1980, de acuerdo al PNUD, la esperanza de vida al nacer de los bolivianos era 52 años, al año 2011 alcanzó los 67 años, La Ley de pensiones de 1996 estableció la edad de jubilación con lo que se tenga ahorrado a los 65 años, en el año 2010 esta edad fue reducida a 58 años.

La COB pasó por alto que los jubilados después de la UDP fueron los últimos en recuperar capacidad adquisitiva. Les tomó 15 años en alcanzar una jubilación digna, y bajo la movilización dirigida por Argandoña y García, en soberbias marchas por el altiplano, recién el año 2002 arrancaron las conquistas de los bono CAPA (Caracollo y Patacamaya), iniciando el acceso a rentas en un monto esencial.

La movilización de la COB puso al desnudo su desconocimiento de las luchas proletarias en cuanto a la jubilación se refiere. Por un lado esas luchas se orientaron a incrementar el monto de las pensiones a los primeros tramos donde están quienes menos renta perciben, donde están precisamente la mayoría de los trabajadores mineros, ello se tradujo en el incremento inversamente proporcional establecido por Ley, y por otro, se orientó y logró que se fije un tope máximo al pago en pensiones proveniente del TGN, dado que algunos políticos y magistrados tenían pensiones superiores a los Bs20.000.- , aprovechando la coyuntura de que los organismos de cooperación multilateral condicionaron su financiamiento a la aplicación de medidas de austeridad.

Una vez conocida la clara visión que tienen los dirigentes de la COB, en sentido de consolidar rentas iguales a los elevados salarios actuales para quienes episódicamente “ganan bien”, financiados por el Fondo Solidario, la COB lamentablemente malbarató la movilización, se aisló, quedó aislada, su planteamiento fue exactamente lo opuesto a una reivindicación general, la ilusión se desvaneció

pronto al interior de los trabajadores que aspiran a una jubilación, desatando protestas airadas en quienes nunca tendrán una jubilación contributiva. Con estos antecedentes, ahora serán menos quienes deseen ser representados por la COB en el directorio de la gestora pública.

Fuente: [Hans Mejia Vera. Rebelión](#)

COLOMBIA

CELDA COLOMBIA

Hace unos años escribí un libro con testimonios de presos en varias cárceles del país. No sólo nada ha cambiado, sino que todo ha empeorado. Los reos siguen pagándoles impuestos a los matones — incluidos muchos de los guardianes— por un lugar para dormir; comprándoles el turno para llamar por teléfono, para entrar a la enfermería, para ir al baño, para salir al patio. Siguen asesinando internos y seguramente como sucedió en la Modelo, cortando en pedacitos el cadáver y botándolo por la alcantarilla del penal.

Todo en la cana tiene precio y las ganancias de los negocios y negociados son compartidas entre capos y guardianes. Las cárceles son el reflejo más fiel de la realidad del país. Los grandes capos siguen delinquiendo extramuros. Lo más grave es, sin duda, que ese siniestro y negro mundo está amparado en una ilegalidad palpable: el hacinamiento. La Corte Constitucional ha emitido fallos para remediar este otro “estado de cosas inconstitucionales” y el Gobierno cumple en apariencia, redistribuye cargas y unos meses después vuelve a meter la misma cantidad de gente en el mismo sitio de donde salió. El actual defensor del Pueblo, cuando se permite dejar de examinar la nómina de la entidad, va y les echa una mirada a las cárceles para conceptuar muy quedamente: hay una emergencia.

A la opinión pública le han hecho creer que la cosa es porque “somos un país de cafres”, que se delinque por la cultura, por la raza, por el fenotipo, por la ruana. Cualquier imbecilidad es buena para salir del caso. Pero la cosa es otra si se mira que hay una violenta tensión entre los modelos de vida implantados por el consumismo y las posibilidades reales de que la gente pueda ser como le dicen que debe ser: tener una camioneta plateada, un apartamento con ascensor privado, ser miembro de un club, vestirse con ropa de marca, ir de vacaciones a Miami, pasearse de coctel en coctel, quitarse gordos y arrugas, invertir en Rubiales. Alcanzar esos valores supremos del consumismo no es posible sino acumulando dinero, salga de donde salga. El 99% de los colombianos no tienen la posibilidad de hacer compatibles los ideales consumistas con los ingresos alcanzables. Esa contradicción es la mama del ternero. La gente delinque porque todo lo empuja al consumo conspicuo sin tener los medios para coronarlo. El narcotráfico y la corrupción administrativa han sido dos de los modos de salir de la contradicción. También, claro está, el robo, el asesinato, la extorsión. Las cárceles están llenas de frustración, como es obvio, allí no hay ni una lejana posibilidad de resolverla. Por el contrario, se reproducen la diferencias: hay caspete, restaurante para los estratos 5 y 6, y evaristo para los 1 y 2; hay celdas para los primeros y pasillos para los segundos. Así todo. Y todo con la interesada complicidad de los guardianes. Ecuación que da: delincuentes administrados por delincuentes. Igual que afuera. Y más grave porque la función del penal es reeducar al delincuente.

La tendencia estadística es alarmante: hoy el hacinamiento carcelario es del 54%, mientras que en 2005 era apenas del 15%. Las políticas de seguridad y el estatuto anticorrupción están íntimamente asociados con este crecimiento. Por cada 3.500 nuevos internos, apenas salen 350. En las cárceles hay unos 120.000 reos y 8.000 guardianes activos.

El Estado ha ido privatizando los servicios carcelarios como alimentación, salud e incluso seguridad, porque la administración de los chips que les ponen a algunos de los que dejan salir a hacer “vueltas” son manejados por una empresa particular. Las constantes denuncias de los directores y altos empleados del Inpec parecen dirigidas a mostrar un caos tal, que sólo con la privatización total del servicio se resolvería la tragedia. De seguro ya están haciendo lobby las multinacionales de seguridad como podrían ser las conocidas Grupo GEO, Corrections Corporation of América, Serco,

Magagement and Training Corporation, el Grupo 4 Securicor y Sodexho, etc. El modelo es conocido: primero corrompen las empresas públicas y luego las privatizan para que las compañías privadas se ganen lo que antes se repartían con los delincuentes.

[Alfredo Molano Bravo](#) - El Espectador

IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS DEL INGRESO DE COLOMBIA A LA OTAN

El anuncio del presidente de Colombia Juan Manuel Santos de que “durante este mes de Junio suscribirá un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición de ingresar a ella” ha causado una previsible conmoción en Nuestra América. Lo pronunció en un acto de ascensos a miembros de la Armada realizado en Bogotá, ocasión en la cual Santos señaló que Colombia tiene derecho a “pensar en grande”, y que él va a buscar ser de los mejores “ya no de la región, sino del mundo entero”. Continuó luego diciendo que “si logramos esa paz –refiriéndose a las conversaciones de paz que están en curso en Cuba, con el aval de los anfitriones, Noruega y Venezuela- nuestro Ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a nivel internacional. Ya lo estamos haciendo en muchos frentes”, aseguró Santos. Y piensa hacerlo nada menos que asociándose a la OTAN, una organización sobre la cual pesan innumerables crímenes de todo tipo perpetrados en la propia Europa (recordar el bombardeo a la ex Yugoslavia), a Libia y ahora su colaboración con los terroristas que han tomado a Siria por asalto.

Jacobo David Blinder, ensayista y periodista brasileño, fue uno de los primeros en alarmarse ante esta decisión del colombiano. Hasta ahora el único país de América Latina “aliado extra OTAN” era la Argentina, que obtuvo ese deshonroso status durante los nefastos años de Menem, y más específicamente en 1998, luego de participar en la Primera Guerra del Golfo (1991-1992) y aceptar todas las imposiciones impuestas por Washington en muchas áreas de la política pública, como por ejemplo desmantelar el proyecto del misil Cóndor y congelar el programa nuclear que durante décadas venía desarrollándose en la Argentina. Dos gravísimos atentados que suman poco más de un centenar de muertos –a la Embajada de Israel y a la AMIA- fue el saldo que dejó en la Argentina la represalia por haberse sumado a la organización terrorista noratlántica.

El status de “aliado extra OTAN” fue creado en 1989 por el Congreso de los Estados Unidos –no por la organización- como un mecanismo para reforzar los lazos militares con países situados fuera del área del Atlántico Norte pero que podrían ser de alguna ayuda en las numerosas guerras y procesos de desestabilización política que Estados Unidos despliega en los más apartados rincones del planeta. Australia, Egipto, Israel, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en ingresar, y poco después lo hizo la Argentina, y ahora aspira a lograrlo Colombia. El sentido de esta iniciativa del Congreso norteamericano salta a la vista: se trata de legitimar y robustecer sus incesantes aventuras militares -inevitables durante los próximos treinta años, si leemos los documentos del Pentágono sobre futuros escenarios internacionales- con un aura de “consenso multilateral” que en realidad no tienen. Esta incorporación de los aliados extra-regionales de la OTAN, que está siendo promovida en los demás continentes, refleja la exigencia impuesta por la transformación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su tránsito desde un ejército preparado para librar guerras en territorios acotados a una legión imperial que con sus bases militares de distinto tipo (más de mil en todo el planeta), sus fuerzas regulares, sus unidades de “despliegue rápido” y el creciente ejército de “contratistas” (vulgo: mercenarios) quiere estar preparada para intervenir en pocas horas para defender los intereses estadounidenses en cualquier punto caliente del planeta. Con su decisión Santos se pone al servicio de tan funesto proyecto.

A diferencia de la Argentina (que por supuesto debería renunciar sin más demora a su status en una organización criminal como la OTAN), el caso colombiano es muy especial, porque desde hace décadas recibe, en el marco del Plan Colombia, un muy importante apoyo económico y militar de Estados Unidos –de lejos el mayor de los países del área- y sólo superado por los desembolsos realizados en favor de Israel, Egipto, Irak y Corea del Sur y algún que otro aliado estratégico de Washington. Cuando Santos declara su vocación de proyectarse sobre el “mundo entero” lo que esto significa es su disposición para convertirse en cómplice de Washington, para movilizar sus bien

pertrechadas fuerzas más allá del territorio colombiano y para intervenir en los países que el imperio procura desestabilizar, en primer lugar Venezuela. Es poco probable que su anuncio signifique que está dispuesto a enviar tropas a Afganistán u a otros teatros de guerra. La pretensión de la derecha colombiana, en el poder desde siempre, ha sido convertirse, especialmente a partir de la presidencia del narcopolítico Álvaro Uribe Vélez, en la “Israel de América Latina” erigiéndose, con el respaldo de la OTAN, en el gendarme regional del área para agredir a vecinos como Venezuela, Ecuador y otros -¿Bolivia, Nicaragua, Cuba?- que tengan la osadía de oponerse a los designios imperiales. Eso y no otra cosa es lo que significa su declaración.

Pero hay algo más: con su decisión Santos también pone irresponsablemente en entredicho la marcha de las conversaciones de paz con las FARC en La Habana (uno de cuyos avales es precisamente Venezuela), asestando un duro golpe a las expectativas de colombianas y colombianos que desde hace décadas quieren poner fin al conflicto armado que tan indecibles sufrimientos deparó para su pueblo. ¿Cómo podrían confiar los guerrilleros colombianos en un gobierno que no cesa de proclamar su vocación injerencista y militarista, ahora potenciada por su pretendida alianza con una organización de tintes tan delictivos como la OTAN? Por otra parte, esta decisión no puede sino debilitar –premeditadamente, por supuesto- los procesos de integración y unificación supranacional en curso en América Latina y el Caribe. La tesis de los “caballos de Troya” del imperio, que repetidamente hemos planteado en nuestros escritos sobre el tema, asumen renovada actualidad con la decisión del mandatario colombiano. ¿Qué hará ahora la UNASUR y cómo podrá actuar el Consejo de Defensa Suramericano cuyo mandato conferido por los jefes y jefas de estado de nuestros países ha sido consolidar a nuestra región como una zona de paz, como un área libre de la presencia de armas nucleares o de destrucción masiva, como una contribución a la paz mundial para lo cual se requiere construir una política de defensa común y fortalecer la cooperación regional en ese campo?

Es indiscutible que detrás de esta decisión del presidente colombiano se encuentra la mano de Washington, que paulatinamente convirtió a la OTAN en una organización delictiva de alcance mundial, rebalsando con creces el perímetro del Atlántico Norte que era su límite original. También se advertía la mano de Obama al impulsar, poco después de lanzada la Alianza del Pacífico (tentativa de resucitar el ALCA con otro nombre), la provocadora recepción por parte de Santos del líder golpista venezolano Henrique Capriles. Lo mismo puede percibirse ahora, con todas las implicaciones geopolíticas que tiene esa iniciativa al tensar la cuerda de las relaciones colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto militar entre sus vecinos; debilitar a la UNASUR y la CELAC; alinearse con Gran Bretaña en el diferendo con la Argentina por Las Malvinas, dado que esa es la postura oficial de la OTAN. Y quien menciona esta organización no puede sino recordar que, como dicen los especialistas en el tema, el nervio y músculo de la OTAN los aporta Estados Unidos y no los otros estados miembros, reducidos al triste papel de simples peones del mandamás imperial. En suma: una nueva vuelta de tuerca de la contraofensiva imperialista en Nuestra América, que sólo podrá ser rechazada por la masiva movilización de los pueblos y la enérgica respuesta de los gobiernos genuinamente democráticos de la región. Esa será una de las pruebas de fuego que tendrán que sobrellevar en las próximas semanas.

[Atilio Borón](#) - Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

EL SALVADOR

BRECHA ENTRE PROPÓSITOS Y REALIZACIONES

En la propaganda política importan mucho las palabras y las intenciones, pero en la realidad lo que importa son las acciones y la profundidad de las obras. Por supuesto que la propaganda no es solo palabrerío, si así fuera, no engañaría ni impresionaría a nadie; algo de realidad tiene que llevar para sustentar su pretensión de convencimiento. Vistos con mayor análisis, los contenidos de los informes de gestión presidencial suelen ser más propagandísticos que una verdadera rendición de cuentas sobre lo que realmente se ha hecho o dejado de hacer. Más que informes, son discursos oficiosos en los que el presidente de turno habla en tono grandilocuente, enfatizando las supuestas conquistas

inéditas y sin precedentes alcanzadas. El discurso del cuarto año de gobierno de Mauricio Funes no fue la excepción, siguió la misma pauta de las grandes peroratas que cansan y aburren a la audiencia promedio; y peor todavía si se encadena a los medios para que la gente se quede sin opciones. En realidad, este tipo de discursos no está pensado para la ciudadanía, sino para las élites política, económica y militar. Ellos son los verdaderos interlocutores, no la población, que por lo general no los escucha.

No obstante, es necesario dejar registro de las brechas que suele haber entre los logros proclamados y la realidad imperante; no solo por un afán de crítica, sino, sobre todo, para no perder de vista la dinámica que más configura la vida de la mayor parte de salvadoreños y que requiere, sin duda, de políticas que toquen las raíces estructurales de sus principales problemas. Veamos, al menos, tres de los supuestos logros consignados en el discurso: la transformación del modelo oligárquico, la democratización del país y la seguridad ciudadana. Enunciaremos lo que se dijo en el discurso y luego lo compararemos con la percepción ciudadana reflejada en la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), y con algunos datos que sobre estos temas vienen reiterando instancias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El presidente Funes habló de una profunda transformación cultural que se vive en el país. Y en este sentido, señaló “el paso de un modelo de gestión de corte oligárquico, entendido como el gobierno de unos pocos para unos pocos, a un gobierno democrático y popular”. Y como ejemplo de estas transformaciones citó la entrega de títulos de propiedad a decenas de miles de familias campesinas y las políticas públicas que dieron nacimiento al Sistema de Protección Social Universal. A su juicio, de esa manera, “se ha dejado atrás, definitivamente, el modelo oligárquico que asfixió al país durante décadas”.

Ahora bien, ¿cómo percibe la ciudadanía los cambios en la política social y en los mecanismos de distribución de la riqueza? Desde la percepción ciudadana, según la encuesta del Iudop, el único acierto señalado con un porcentaje importante de opiniones son los paquetes y ayudas escolares (36.7%); la entrega de dinero a familias pobres, el apoyo a la agricultura y Ciudad Mujer son mencionados en menores proporciones. Por otra parte, al consultar sobre el estado de la economía con el actual Gobierno, más del 45% dice que ha empeorado, el 28.5% que sigue igual y solo el 25.6% dice que ha mejorado. Más llamativo todavía: el 61.1% asegura que el presidente no ha cumplido su promesa de generar 100 mil nuevos empleos.

Es difícil aceptar que el modelo oligárquico ha cambiado cuando persisten, muy arraigados, aspectos estructurales de esa forma de gobernar. Por ejemplo, para el PNUD, en el país prevalece un modelo de desarrollo que ha hecho de los bajos salarios de los trabajadores la principal ventaja para insertarse en los mercados internacionales, y del subempleo, la forma predominante de sobrevivencia para la mayoría de la población. Las consecuencias pueden verificarse en las cifras económicas: altas tasas de subutilización laboral: solamente el 47% de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral; de cada 100 personas que forman parte de la población económicamente activa, seis están desempleadas y 44 subempleadas. Afirmar, entonces, que el modelo de gestión de corte oligárquico pertenece al pasado es, en el mejor de los casos, una exageración, y en el peor, una mentira.

En lo que respecta a la democratización política, el presidente se atribuye haber promovido el respeto pleno a la independencia de los tres poderes del Estado. El mandatario parece olvidar sus actitudes renuentes y hostiles hacia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta se ha mostrado independiente ante los poderes legislativo y ejecutivo. Todavía recordamos, entre otros, sus ataques virulentos contra la Sala cuando esta declaró inconstitucional un artículo de la Ley General de Presupuesto por medio del cual se autorizaba al Presidente de la República a trasladar dineros de un ministerio a otro, sin autorización de la Asamblea Legislativa. También se declararon ilegales las llamadas “partidas secretas” de las que dispone la Presidencia. Una y otra vez, Funes se mostró intolerante ante el establecimiento de controles al manejo de los fondos públicos.

Frente a las resoluciones de la Sala que los afectaban directamente, los partidos políticos y el Ejecutivo buscaron frenar la independencia de los magistrados. Primero, con el nefasto decreto 743, que establecía que los fallos o resoluciones de la Sala debían alcanzarse por decisión unánime de los cinco magistrados, no por mayoría (4-1). Aunque el decreto se derogó después de una fuerte presión de la sociedad civil, las amenazas contra la Sala se mantienen bajo otras formas hasta el día de hoy. Por tanto, si hemos de ser honrados con la realidad, debemos decir que el fortalecimiento de la independencia de los tres poderes del Estado ha sido posible gracias al ejercicio jurídico de una Sala (especialmente, de cuatro de sus magistrados) que se ha tomado en serio esta exigencia de la democracia.

Finalmente, en lo que se refiere al ámbito de la seguridad pública, el presidente Funes expresó que “El Salvador tiene una estrategia integral en materia de seguridad, que se ha visto potenciada y facilitada por la llamada tregua entre pandillas”. En su opinión, hay un nuevo panorama: “Los homicidios han caído en un 52 por ciento; pasamos de 12 a 14 homicidios diarios a una media de casi 5; ha disminuido el número de muertes violentas por cada 100 mil habitantes de 68 a 30; las extorsiones disminuyeron un 11 por ciento en 12 meses y un 8 por ciento los robos, y las desapariciones cayeron un 25 por ciento”.

Sin embargo, la ciudadanía ve las cosas de un modo totalmente distinto. Según la encuesta del Iudop, para el 41.3% de la gente, con el actual Gobierno la delincuencia ha aumentado. Más aún, al consultar sobre el cumplimiento de la promesa del presidente de combatir la delincuencia, casi el 52% de los encuestados opina que no ha sido cumplida. A esta insatisfacción se suma la desconfianza de la gran mayoría de la población hacia la tregua entre las pandillas. Al respecto, la encuesta revela que el 83.1% de la población confía poco o nada en esta medida. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador se pronunció en contra de la tregua, argumentando que no ha producido los beneficios que la población honrada y trabajadora esperaba. Hay consenso entre diversas fuerzas sociales en que el actual Gobierno no ha tenido una política de seguridad clara y estratégica que enfrente el problema en sus diferentes expresiones: pandillas, crimen organizado y violencia social. En suma, hay una brecha considerable entre lo que dice el presidente Funes y lo que dicen la población y los datos de la realidad. Un acto de honradez exige que los gobernantes respondan a las necesidades que son impostergables en el país: la seguridad y la economía son dos de las prioritarias.

Fuente: [Carlos Ayala Ramírez](#). Alainet

HONDURAS

NUEVA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

Arturo Corrales Álvarez, actual Ministro de Seguridad y ex Canciller de la República del gobierno de Facto de Porfirio Lobo, es el empleado favorito de la oligarquía para ejecutar reacomodos en el poder, es la cara visible de uno de los sectores más agresivos en el saqueo del Estado de Honduras y también un próspero delincuente.

Fue uno de los ejecutores del golpe de estado Militar de 2009 que produjo un reposicionamiento de la ultraderecha en el control del estado y la puesta en vigencia de medidas neoliberales, mismas que hicieron retroceder al país a los niveles de pobreza y miseria ya superados por el Gobierno Constitucional del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

El proyecto de la oligarquía era claro, necesitaban seguir vendiendo el país y empeñar el futuro de la población en función de lograr la mayor acumulación de capitales posibles, aunque para esto tuvieran que vender también una y mil veces la soberanía, los recursos estratégicos y la paz social.

Honduras es hoy el país más violento del mundo, 23 cadáveres aparecen diariamente asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional. Según declaraciones del ex Fiscal General Luis Alberto Rubí solamente 2 de cada 10 asesinatos son investigados, la cantidad de casos resueltos se pierde en una cifra infinitesimal muy lejana a la justicia.

La raíz del conflicto es la misma, la concentración de la riqueza socialmente producida en las mismas manos de la oligarquía. Los niveles de explotación de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país representan el paraíso del capital nacional y extranjero, un obrero u obrera perciben un salario mínimo que representa menos del 30% del costo de la canasta básica que publica el Banco Central de Honduras.

En la década de los ochenta –momento cúspide de la persecución política en Honduras- la famosa Dirección Nacional de Inteligencia DNI, (conocida también como “DIN”), aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional y condujo el desaparecimiento físico, el asesinato, la tortura, el exilio y el encarcelamiento de miles de hondureños y hondureñas organizadas en el movimiento popular y en los partidos de izquierda.

En la década del noventa, bajo la cosmetología neoliberal, la DNI mutó su fachada a la de Dirección General de Investigación Criminal DGIC y, salvo la exclusión de algunos depravados torturadores, los cambios de la institución no fueron sustanciales.

Esta semana la llamada “depuración policial” proceso que representa el alineamiento de voluntades de la Policía Nacional hacia el sector oligarca más comprometido con el golpe, encendió las alarmas del pueblo cuando se suspendió a todo el personal de la DGIC, mancando una nueva etapa de segregación cada vez más fina de los leales al golpe y a acciones violentas futuras (digamos por ejemplo las elecciones del 24 de noviembre).

A su vez, esta misma semana fue creada la unidad elite “Tigres” bajo mando de la Policía Nacional y que lleva su nombre en honor al sicópata que coordina esa institución. La unidad, como todos los organismos de represión del Estado, está creada especialmente para perseguir, controlar y asesinar a la oposición política de la oligarquía y no para prevenir el crimen común del que está harto demostrado y reconocido por ellos mismos, que la institución policial está vinculada.

Todas las encuestas colocan a Xiomara Castro de Zelaya en los primerísimos lugares de aceptación popular y voluntad del voto. Los pésimos candidatos del bipartidismo son un franco hazmerreír que refleja la decadencia y el anacronismo del discurso de la derecha en Honduras.

La oligarquía sin cartas se enfrenta al dilema de patear nuevamente el tablero del juego democrático o enfrentar otra vez la deslegitimación total mediante el voto popular en las elecciones del penúltimo mes del 2013.

Mientras tanto el pueblo multiplica aceleradamente la organización Partidaria de Libre y acrecenta el debate que eleva la conciencia y acerca cada vez más un proyecto político Socialista como única alternativa a la barbarie del capital.

Tomado de www.losnecios.com

MÉXICO

SIN FUNDAMENTO, SENTENCIAN A 20 AÑOS DE PRISIÓN A TZOTZIL DE LA VOZ DEL AMATE

El preso tzotzil Rosario Díaz Méndez, miembro de la Voz del Amate y adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona, quien lleva ocho años en prisión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recibió este martes una sentencia de 20 años, acusado de secuestro. Infundadamente, según numerosas evidencias que no consideró Jacqueline Ángel, juez de primera instancia en Simojovel.

La injusticia sigue, escribe Díaz Méndez desde su celda en el penal número cinco de Chiapas. La nueva condena, contenida en el expediente 333/2005, es por el delito prefabricado de secuestro, a pesar de que los agraviados dicen no conocerme y piden mi libertad, y a mis testigos de descargo ni los mencionan, pues la autoridad es ciega y sorda. Añade que el origen de su persecución judicial fue por encabezar a uno 300 pobladores de Huitiupán contra la cancelación de medidores del agua potable que estaba sufriendo mi municipio en manos del ayuntamiento presidido por Hernal González López. El funcionario involucró en 2005 a personas que lo acusaron de secuestro. Pesa

también sobre Rosario una acusación por presunto homicidio, por la cual ya fue condenado a 25 años e interpuso una apelación de la cual se espera sentencia en las próximas semanas.

Piden que intervenga Velasco Coello

Díaz Méndez exige al gobernador Manuel Velasco Coello dé fin a este injusto encarcelamiento, y lo emplaza a que cumpla con su palabra del 18 de abril, cuando se comprometió a liberarnos (a los presos adherentes de la Sexta).

En tanto, la Red contra la Represión demandó la absolución de Díaz Méndez por el homicidio que se le imputa (expediente 47/2005) y convocó a protestas en los distintos países donde los presos de la Sexta cuentan con simpatizantes que demandan su excarcelación.

El pasado 24 de enero, el juzgado de Simojovel dictó sentencia condenatoria por homicidio pese a las evidencias claras de su inocencia, sostiene la Red. La primera sala penal en Tuxtla Gutiérrez determinó reponer el procedimiento para el desahogo de pruebas relevantes a favor del preso. En abril se esperaba su expediente en el juzgado de San Cristóbal, pero llegó incompleto y fue regresado a Simojovel. Para la juez Ángel no es de mayor importancia que se siga demorando esta injusticia, y cabe pensar que es una forma de boicot al compañero para encubrir a funcionarios del municipio implicados en la elaboración de pruebas falsas.

La Red expone que Díaz Méndez fue acusado de participar en un asalto ocurrido el 4 de abril de 2005 en Huitiupan, en el que falleció Maurilio Madrigal Rodríguez, comerciante de Tabasco que en compañía de cuatro personas vendía productos de plástico. El ministerio público (MP) de Simojovel omitió de manera negligente y deliberada la práctica de diligencias que hubieran permitido conocer con mayor precisión los hechos y a los responsables. Tres meses después, el MP simula la comparecencia de dos personas más que según el expediente habrían presenciado los hechos. La agencia estatal de investigaciones presentó el 6 de junio de ese año un informe donde aseguraba haberse entrevistado con estos testigos. Estos endebles elementos son la base de la acusación y las decisiones judiciales anteriores a la última reposición del procedimiento.

En el momento del asalto, Díaz Méndez se encontraba en Playa del Carmen, Quintana Roo, trabajando de albañil junto con sus hijos. Los cuatro sobrevivientes del asalto en ningún momento manifestaron haber visto a Rosario participar en el delito y cuando en 2008 se carearon con él no lo reconocieron como uno de los agresores.

El MP debió basar entonces su acusación en otros dos supuestos testigos, Rogelio Gómez García y Juan Gómez Cortez, quienes habrían declarado ver los hechos e identificar al acusado. No obstante, ambos vivían lejos de los hechos y es poco probable que los presenciaran. El segundo estaba a la sazón gravemente enfermo y fallecería 12 días después de su presunta declaración. El primero, en un careo realizado en 2012, desconoció la declaración ministerial en la que supuestamente acusaba a Díaz Méndez. Estamos frente a un clásico montaje judicial por venganzas políticas y favores personales de las cuales Rosario es víctima y no victimario, concluye la Red.

Escrito por Hermann Bellinghausen en La Jornada

NICARAGUA

ORTEGA ASEGURA QUE PRONTO SERÁ REALIDAD EL SUEÑO DEL GRAN CANAL

El presidente **Daniel Ortega** invitó este miércoles a Brasil, Suiza, Canadá, Arabia Saudita y Kuwait a participar en la construcción del **Gran Canal Interoceánico de Nicaragua**, cuyo estudio de factibilidad estará listo en un año.

La invitación la extendió el presidente **Ortega** a los nuevos embajadores de esos países en una ceremonia de entrega de cartas credenciales en la Casa de los Pueblos de Managua.

El presidente **Ortega** dijo que espera que la Asamblea Nacional apruebe "en los próximos días" dos proyectos de ley para facilitar a una empresa china la construcción de un canal interoceánico de gran calado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

En noviembre pasado vino al país una misión de alto nivel de China Continental para ver detalles con el Presidente **Ortega** acerca de la construcción del Canal. Hace dos semanas el mandatario hizo público que la construcción del Canal va y que así lo hizo saber hace un mes al Presidente de Estados Unidos, **Barack Obama** en la cumbre del SICA en Costa Rica.

"Tendríamos hasta el mes de mayo del próximo año (2014) para que esté listo el estudio de factibilidad (del canal), y en mayo del siguiente año (2015) estaría arrancando la obra", anunció **Ortega** a los embajadores, dando por hecho la aprobación inmediata de sus propuestas ante el Congreso, donde el sandinismo es mayoría.

El Presidente **Ortega** envió la mañana del miércoles al Parlamento, con carácter urgente, los dos proyectos de Ley vinculados a la construcción del Gran Canal. "Se trata de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados, y de la Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional", informó este mediodía el presidente de la Asamblea Nacional, **René Núñez Téllez**.

Además, anunció que ha convocado a los 92 diputados a una sesión especial el viernes próximo para dar a conocer los proyectos, los cuales serán enviados a la Comisión de Infraestructura que las dictaminará posiblemente después de una semana de consultas.

En septiembre pasado, Nicaragua firmó un memorando de entendimiento con la compañía china **HK Nicaragua Development Inversion Company** para la construcción de un canal interoceánico de gran calado entre el Atlántico y el Pacífico, una obra que durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares.

El Estado nicaragüense autorizó en el memorando de entendimiento a la empresa HK Nicaragua, constituida en Hong Kong, a estructurar y gestionar la financiación para construir el canal interoceánico, que incluye oleoductos, puertos y pistas aéreas tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

Fin de siglos de pobreza

"Después de tantos siglos de estar luchando para que se convierta en realidad este canal, por fin ha llegado el momento, con el gobierno sandinista, para ejecutarlo y que ha llegado el momento en que ese sueño se haga realidad y creo que Brasil se va a interesar en esto", señaló **Ortega**.

Esta obra, agregó, es de suma importancia para el pueblo de Nicaragua porque permitirá erradicar la pobreza y el desempleo, y además servirá no solo para el desarrollo del país sino de toda la región.

El gobernante explicó que el canal será húmedo, como el de Panamá, y estará acompañado por un canal seco, es decir ferrocarril, dos puertos de aguas profundas en ambos mares, un oleoducto, zonas francas y dos aeropuertos.

El nuevo embajador de Brasil en Managua, **Luis Felipe Mendoza**, se comprometió a llevar a la presidenta **Dilma Rousseff** el mensaje de **Ortega**. "Yo me comprometo a llevar a mi presidenta lo que usted acaba de decir sobre el canal y buscar interesar, hacer todos mis empeñados esfuerzos, para que nuestras empresas se interesen en participar; es un compromiso que yo asumo ahora acá, cuando presento mis cartas credenciales", dijo. "Estamos interesados en hacer todo lo que se requiera para que nuestras empresas se interesen en el canal", afirmó el embajador **Mendoza**.

El Parlamento aprobó en julio de 2012 la ley de construcción del canal interoceánico, una empresa de carácter público-privada, en la que el Estado tendrá el 51% de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49% a los inversores, que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas.

Según la ley, el canal nicaragüense podría estar parcialmente construido para 2019, año en el que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial. Además, la zona de construcción del canal será declarada de utilidad pública y el Estado nicaragüense indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.

Actualmente tres compañías holandesas realizan estudios de prefactibilidad para la construcción del canal interoceánico, según el Gobierno de Managua.

Por su lado el presidente de la citada comisión parlamentaria, **Jacinto Suárez**, admitió que existe una urgencia por parte del gobierno para asegurar la participación de una empresa china radicada en Hong Kong en el ambicioso proyecto, que uniría el Océano Pacífico con el Mar Caribe. "Si estamos apurados, mejor todavía, ¿cuál es el problema del apuro?", dijo **Suárez** y agregó que el llamado Gran Canal Interoceánico es "el sueño más grande que ha tenido Nicaragua como nación".

Suárez sostuvo que de concretarse, el megaproyecto será "la solución a todos y cada uno de los problemas no sólo de Nicaragua, sino de Centroamérica" porque reactivará enormemente la economía regional.

COSEP respalda concesión

Los empresarios del **COSEP**, en su consejo directivo reunido este miércoles, decidieron respaldar la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo para otorgar una concesión de construcción del Canal Interoceánico a una empresa china. En conferencia de prensa, el titular del **COSEP**, **José Adán Aguerri** dijo tener en su poder copia del ante proyecto de ley y por eso decidieron "respaldar e impulsar este proceso, teniendo en cuenta una serie de elementos que estaremos dando a conocer en nuestro posicionamiento cuando seamos llamados a la Asamblea Nacional".

Detalló que estos van alrededor de temas que son del interés del sector privado, como asegurar que el proyecto tenga todos los estudios medio ambientales necesarios y que la mano de obra de los nicaragüenses sea tomada en cuenta y que las empresas nicaragüenses también participen de la construcción del Canal.

En el 2001 la Asamblea Nacional aprobó las concesiones para construir canales interoceánicos secos en Nicaragua a favor de **SIT-Global** y Canal Interoceánico de Nicaragua Sociedad Anónima (**CINN**), pero nunca arrancaron.

Informa: Radio La Primerísima

PANAMÁ

PARTIDOS LE DAN LA BIENVENIDA AL FAD

26/05/2013 - El Frente Amplio por la Democracia (FAD), que aglutina a miembros de la clase obrera y sindical, está a punto de cumplir un viejo objetivo: convertirse en partido político.

Según el educador Andrés Rodríguez, dirigente del FAD, este partido en formación hasta ayer sábado había recolectado 79 mil 930 firmas para constituirse en partido político, números que van más allá de la cifra que les exige el Tribunal Electoral [63 mil 457 firmas]. "Esperamos llegar hasta las 80 mil firmas; lo que buscamos es tener un colchón, ahora que viene el proceso de depuración", explicó Rodríguez.

Aseguró que esperan que entre julio y agosto el Tribunal Electoral les anuncie que ya son un partido legalmente constituido.

LA BIENVENIDA

En tanto, miembros de los diferentes partidos políticos del país, que han sido blanco de críticas por parte del FAD, ven con buenos ojos la incursión de la clase obrera y sindical en el ruedo político, pero también tienen sus inquietudes sobre el tema.

Según el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático Yassir Purcalt, el hecho es positivo.

"Siempre los dirigentes sindicalistas han tomado posiciones políticas y ya era hora de que formalizaran esas posiciones", agregó.

Francisco Pancho Alemán, vicepresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, considera que la incursión del Frente Amplio por la Democracia en el ruedo político es un gran aporte de un grupo organizado a la democracia.

“Es positivo, y es bienvenido”, manifestó.

Con respecto al impacto que tendrá esta agrupación en las elecciones generales de 2014, Alemán dijo que “primero hay que ver a quiénes van a postular”.

A Carlos Rubio, del Partido Popular, le parece bien que el FAD participe dentro del sistema y bajo las reglas democráticas, contrario a como se destacaban en el pasado, que criticaban el sistema, pero no participaban de él.

“Bienvenidos al ruedo político y espero que puedan constituirse lo más pronto posible para participar en las elecciones”, expresó.

Tomado de <http://www.prensa.com/>

PUERTO RICO

PUERTORRIQUEÑOS PIDEN LA EXCARCELACIÓN DEL INDEPENDENTISTA ÓSCAR LÓPEZ RIVERA

En una jornada de campaña, cientos de puertorriqueños en Puerto Rico y en Estados Unidos exigieron al Presidente Barack Obama la excarcelación del preso político puertorriqueño Óscar López Rivera, quien cumplió 32 años en prisión el pasado 29 de mayo. Diversas e importantes organizaciones y figuras de la política, líderes religiosos, artistas, familiares, congresistas, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, periodistas, entre otros, se han unido a las voces.

El gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla declaró: “La excarcelación del puertorriqueño Óscar López Rivera, tras 32 años en prisión, es un tema que trasciende porturas políticas-partidistas y preferencias de estatus. Es un asunto directamente relacionado con los principios básicos de justicia social, humanidad y compasión. Por ello, le he solicitado al Presidente de Estados Unidos de América, Honorable Barack Obama, que ejerza su poder constitucional y le conceda el perdón presidencial de forma que se logre su liberación y pronta reinserción a nuestra sociedad. La justicia exige su excarcelación” El Congresista puertorriqueño Luis V. Gutierrez, desde Illinois manifestó: “En EEUU cuando se condenan a algunos asesinos y violadores, ellos reciben menos tiempo en la cárcel que Óscar López. Las empresas que sistemáticamente les causan daño a las personas o al ambiente, apenas reciben una palmada en la muñeca. Imploro al Presidente de los EEUU a devolver un hijo de Puerto Rico a su seno”.

El Obispo Católico Rubén A. González Madina, cmf, expresó una vez más su apoyo en favor de la inmediata excarcelación de Óscar López Rivera. Recordó que la Palabra de Dios nos urge a la solidaridad con cualquier persona que se encuentre en prisión, cuando dice: “Acuérdese de los presos, como si ustedes estuvieran presos con ellos” Hebreos 13,3. Y sobre todo cuando el mismo Jesucristo dice: “Estuve preso y me fueron a ver” Mateo 25,36. El Reverendo Edward Rivera-Santiago, Presidente de la Iglesia Evangélica Unidad de Puerto Rico anotó: “Entendemos como iglesia que la condena de Óscar López Rivera y las condiciones de su encarcelamiento son injustas y desmedidas. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico pide la pronta liberación del Hno. Óscar López Rivera. Hacemos un llamado al Sr. Presidente Obama para que demuestre su sentido de justicia y esperanza tan necesario en este tiempo. Libertad para el Hno. Óscar López Rivera”.

La Presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, la Licenciada Ana Irma Rivera Lassén dijo: “Por la aspiración de libertad para su pueblo fue condenado y castigado por ello de una manera cruel y violatoria de los derechos humanos”. El Presidente José Rodríguez Jiménez, del prestigioso periódico puertorriqueño “Claridad”, añadió: “32 años de encierro, en condiciones que bordean los linderos de la tortura, no han podido doblegar a un hombre, que para vergüenza de sus carceleros, ha crecido a nivel de los grandes luchadores de la libertad, no sólo de Puerto Rico, sino de la humanidad”.

¿Cuál fue su delito? Luchar por la liberación de Puerto Rico de EEUU. Por lo cual fue acusado de conspiración sediciosa, es decir, intentar derrocar el gobierno de EEUU. En otras palabras, luchó por lo mismo que lucharon los Padres Fundadores de EEUU por su independencia de la Corona Británica. Óscar fue ganador de la medalla de Bronce en Vietnam. Nació en Puerto Rico y se crió en Nueva York. Cuando regresó de la guerra en 1967, se hizo un activista comunitario, se destacó por su lucha contra el racismo y el crimen y las deplorables condiciones que vivían los puertorriqueños en Nueva York. La represión de las autoridades fue tanta que tuvo que irse a luchar en la clandestinidad. Fue condenado a 70 años de prisión. Es el prisionero político que lleva más tiempo encarcelado, a pesar de que las autoridades estadounidenses nunca le han probado ningún delito.

Fuente: [Roberto Torres Collazo. Rebelión](#)